



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS  
POLÍTICO, NO. 44

JUNIO 2010

# La estrategia del control total

## Una representación trágica

El psicodrama de la crisis institucional que tiene al país al borde del colapso, se ha convertido en una representación trágica y cínica con las contorsiones del gobierno y la oposición, la compra de voluntades, los argumentos desgastados y el cinismo desplegado por los políticos y funcionarios públicos durante los últimos meses. Si no fuera por la gravedad de sus consecuencias, simplemente se podría reír y pasar a otra cosa.

Observada superficialmente, esta ópera bufa pareciera una suma de hechos inconexos y absurdos; pero si uno observa detenidamente se puede dar cuenta que las acciones del gobierno tienen un sentido y apuntan a un objetivo de importancia: la continuación del gobierno de Daniel Ortega. A diferencia de sus partidos oponentes, que todavía se desgastan en sus propias divisiones, el gobierno ha tomado la delantera preparando un aparato bien aceitado que le permitirá controlar las próximas elecciones mucho antes que se inicie la campaña.

La estrategia diseñada tiene varios componentes, el primero de ellos busca controlar los recursos a nivel del sistema político. Es decir, los recursos, en todo el sentido de la palabra, del aparato de gobierno y a las demás instituciones del Estado. Particular importancia tienen aquí, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo

**L**a crisis institucional del país es, en apariencia, una ópera bufa en la que el gobierno y la oposición buscan el voto faltante haciendo ofrecimientos para doblegar voluntades, intentando nuevas negociaciones oscuras o una jugada de última hora. Sin embargo, esta burda representación esconde en realidad una estrategia bien articulada del gobierno, para dejar el terreno preparado antes de la próxima campaña electoral. De esa manera, cada acción por pequeña que sea, constituye una pieza en el rompecabezas de la maquinaria electoral gubernamental.



Supremo Electoral y la Asamblea Nacional. El segundo componente apunta a controlar la voluntad de los ciudadanos antes, durante y después de las votaciones, pero especialmente cualquier iniciativa o expresión ciudadana de parte de la sociedad civil. Con esta estrategia se aplicaría un doble candado que enlazaría el sistema político y al resto de la sociedad.

### El control del sistema político

A nivel del sistema político, el gobierno está jugando a mantener su control sobre las instituciones de gobierno, especialmente el CSE y la CSJ, que durante los últimos meses se han convertido en la llave para allanar el camino de Daniel Ortega hacia su reelección. Estas dos instituciones le proporcionan la mascarada de legalidad que necesita para hacer su representación frente a la comunidad internacional y hacer creer a todos que sus actos todavía no rompen el orden institucional del país.

De ahí viene el forcejeo político para la elección de los cargos faltantes en la CSJ y el CSE. Daniel Ortega no quiere, ni puede, permitirse perder el control sobre estas dos instituciones, pues ellas van a mantener firme la resolución de la Corte permitiéndole correr como candidato en durante la campaña del 2011. En el caso particular del CSE, mantener el control de todo el sistema electoral es un objetivo estratégico para poder controlar no solamente los aspectos políticos sino también técnicos de la competencia electoral.

Para tener una CSJ y un CSE a la medida de sus deseos, Ortega está obligando a los partidos de oposición

representados en la Asamblea, a hacer contorsiones mediante a compra de voluntades y otras artimañas. La guerra de desgaste montada pretende orillarlos a negociar con el FSLN, especialmente al PLC encabezado por Alemán, y en el camino, ahogar las posibilidades de construir una coalición amplia que pueda aglutinar el voto de la mayoría de los indecisos y la oposición partidaria para dispu-



tarle los votos al candidato eterno del partido.

El juego ha dado sus resultados de cierta manera. Los plazos para la renovación de los cargos en las distintas instituciones del estado, están vencidos y los partidos representados en la Asamblea no han tenido la fuerza suficiente para proponer candidaturas realmente novedosas y sobre todo, íntegras. Pero también es cierto que el partido de gobierno tampoco ha conseguido sentarlos a la mesa de las negociaciones para

renovar el pacto político. Llegados a este punto, pareciera que el problema es el tema de las cuotas de representación de las diferentes fuerzas partidarias en cada una de las instituciones. Ahí parece estar trabada la negociación.

El gobierno también ha tenido un éxito relativo en mantener divididos a los liberales y mantener vivos los intereses personales de los caudillos, de tal manera que, aunque todo mundo desea y sabe que la única alternativa para cambiar el rumbo de la tendencia autoritaria del país, es la construcción de una coalición amplia que unifique a las fuerzas de la oposición, este proceso ha sido mediatizado por aquellos personajes más comprometidos con el pacto y quienes se han dejado tentar por el canto del poder.

Desde el inicio, el gobierno sabía que hacer pasar todo el paquete: conservar el control de las instituciones, forzar la reelección de Ortega e imponer su estilo de gobierno discrecional, iba a ser difícil. El gobierno fue perdiendo el control en la medida en que fueron creciendo los obstáculos con el desgaste del pacto, el debilitamiento de la figura de Alemán como interlocutor de la oposición, una oposición más perfilada a partir de Metrocentro I y II, y el desgaste de los funcionarios salientes.

Por ello se han visto obligados a hacer uso de una abierta discrecionalidad con el decretazo para mantener en sus cargos de manera ilegal a los funcionarios y los recursos legales amaños y un supuesto respaldo ciudadano proveído por las fuerzas de choque del gobierno. Se ha intentado tapar el sol con un dedo, creando una imagen de continuidad en las

instituciones y obligando a sus portavoces a reproducir el discurso de que el país está tranquilo y no hay crisis de gobernabilidad.

Los éxitos relativos del gobierno se deben en gran parte, a que del otro lado no hay una oposición consistente, nadie se atreve a asumir el precio de una ruptura. Por eso, el gobierno apuesta a llegar a las elecciones con una oposición desunida, un CSE y un aparato electoral controlado por el FSLN y una gran falta de confianza de parte de los votantes.

### Una sociedad civil también controlada

Otra parte de la estrategia está dirigida a controlar a la sociedad nicaragüense, especialmente a la sociedad civil organizada. La intención es contrarrestar su capacidad de acción y de presión sobre el gobierno. Para eso, tres acciones han sido fundamentales: la intimidación a través del uso de la violencia política, el control legal sobre las ONG y el cierre de los flujos de cooperación, sobre todo en el campo de las acciones en democracia y gobernabilidad.

Este no es un componente nuevo, se puso en marcha desde la toma de posesión del gobierno Ortega, pues ellos saben que en estos actores hay una enorme potencialidad de acción y movilización tal como ha quedado demostrado en estos tres años. Efectivamente, las expresiones organizadas de la sociedad civil han sido las únicas que todavía resisten y, tanto a nivel nacional como local, han desarrollado diversas acciones en defensa de la democracia y los derechos ciudadanos. En algunos casos

les ha tocado también que asumir un rol que los partidos políticos se han negado a realizar a cabalidad: el de la crítica y la oposición, no porque se lo hayan propuesto así, sino porque es en esas organizaciones donde está ahora la verdadera reserva moral y política del país.

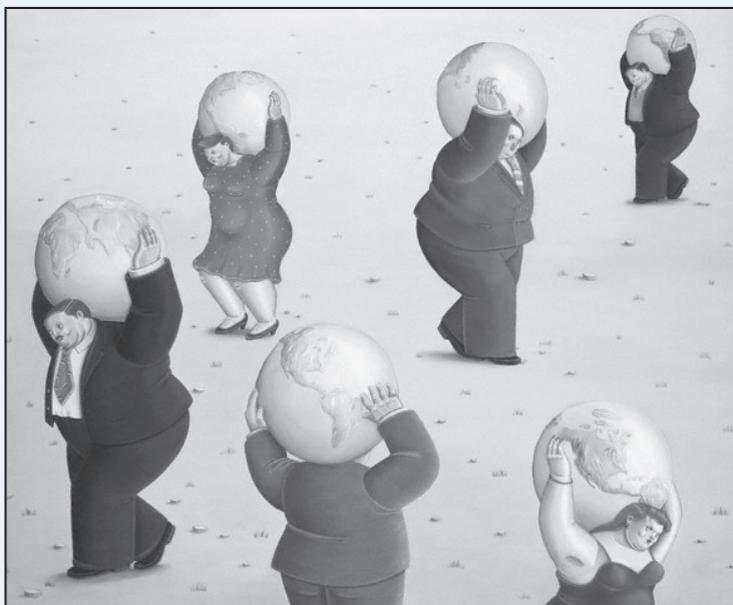
Tradicionalmente los partidos han subestimado a la sociedad civil, incluyendo al FSLN, por eso los partidos de la oposición no se han tomado en serio los acuerdos de Metrocentro y han preferido jugar a la negociación con el gobierno. Este, por su lado, piensa que con la inti-

de cooperación, temerosas, salvo algunas excepciones, prácticamente han congelado los fondos de apoyo dirigidos al área de democracia y gobernabilidad. Aquellas que todavía tienen la intención de apoyar las acciones ciudadanas en defensa de la democracia, se pierden en los trámites burocráticos y el tecnicismo, de tal manera que cuando los recursos llegan a los actores, los calendarios políticos ya los dejaron atrás.

Otro actor importante es el sector privado. El gobierno ha neutralizado a los grandes empresarios del COSEP procurando mantenerlos contentos sin interferir abiertamente en sus negocios para que no engrosen las filas de la oposición. Cualquier intento de los empresarios de criticar o hacer coro con el resto de la sociedad civil ha sido acallado con el recurso de la intimidación, para eso bien está el terrorismo fiscal y por último, las protestas y movilizaciones sindicales dirigidas desde el FNT.

Los intentos de contener a la sociedad civil que defiende a la democracia, han sido inútiles. Las

organizaciones se han movilizado y han empujado acciones de todo tipo, de tal manera que hoy por hoy constituyen el principal riesgo para el gobierno. Son estas organizaciones las que han acudido a la OEA para advertir sobre la situación del país y también se presentaron en Ginebra para denunciar los atropellos que el gobierno ha cometido contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Por su lado, el COSEP ha expuesto su agenda con reivindicaciones políticas democráticas, AMCHAM ha mantenido una posición



midación de los años anteriores y las restricciones que le han impuesto a la cooperación para que no apoye a las organizaciones sociales, su capacidad de acción está bastante limitada. Pero no por ello se han dormido en sus laureles y han activado a toda su militancia y a los CPC para que estén preparados y ocupen todos los espacios posibles sin dejar resquicios, especialmente al nivel local.

Un actor clave en esta operación ha sido la cooperación, y allí el gobierno parece que si ha tenido éxito. La mayoría de las agencias

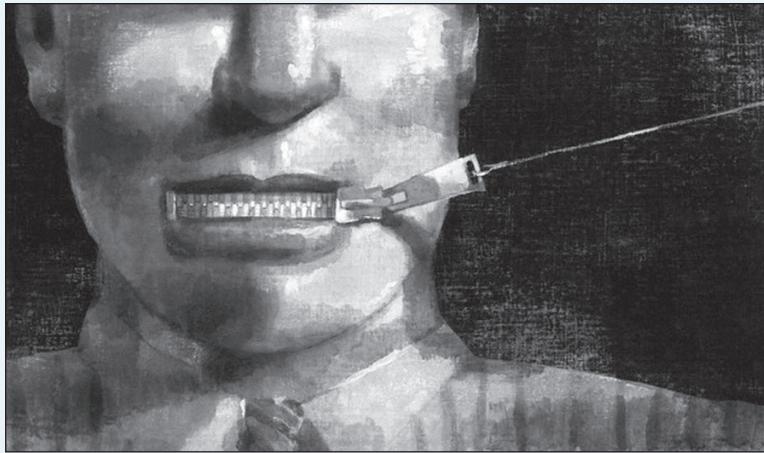
pública crítica. La jerarquía católica también se ha pronunciado en este sentido. De hecho, la imposibilidad del gobierno de instalar un CSE a la medida de sus ambiciones se debe a la cuña que los acuerdos de Metrocentro han significado para los partidos de oposición.

### Para los indecisos: el clientelismo y el miedo

Para el resto de la sociedad, el gobierno ha dispuesto la organización de un aparato partidario al servicio de la reelección: los militantes que todavía están apegados al partido, los CPC y los comandos electorales. Cada uno de los brazos de este aparato tiene misiones específicas designadas desde ahora para asegurar la “victoria electoral”. A algunos les corresponde asegurar los votos del partido, a otros canalizar los recursos clientelistas con los que se espera convencer a los indecisos y otros más tienen como tarea impedir que las fuerzas de la oposición puedan actuar.

En esta estrategia el control de los gobiernos municipales es vital por el rol que jugarán en la campaña. Efectivamente, además de funcionar como centros de distribución de recursos para los “clientes” que se quiere convencer, los gobiernos municipales son el eje del control del resto de la población considerando que allí es donde se concentran las demandas más sentidas y los principales problemas de la ciudadanía. Por eso no es extraño que el primer paso sea destituir a los alcaldes indisciplinados del partido y a los alcaldes provenientes de otras tendencias políticas para colocar en su lugar a los fieles.

Desde el municipio se van a realizar las operaciones de compra de voluntades a través del clientelismo con el uso de los recursos estatales y los de la cooperación venezolana, y las de intimidación para terminar de convencer a los indecisos y para contener a los opositores. Esta intimidación se va a caracterizar por la violencia política, las amenazas, el control de los símbolos y los espacios públicos. Clientelismo y violencia, serán la fórmula perfecta.



### El éxito de la estrategia

El éxito del gobierno con su estrategia de control total depende de cómo reaccionen los ciudadanos, especialmente durante las elecciones del 2011. No hay que engañarse y tener claro que el proyecto hegemónico y reeleccionista de Ortega cuenta con bases firmes para soportar el desgaste. Tiene un aparato todavía cohesionado, dinero propio y los recursos del gobierno para financiar el clientelismo político, pero además ha logrado asociar eficientemente la discrecionalidad, con la impunidad, la intimidación y la acumulación económica. El establecimiento definitivo de ese proyecto cerraría una fase histórica para el país, en la cual, después de la guerra civil, se pretendió generar un modo de coexistencia democrático.

En la otra acera, la oposición aún fragmentada, sin proyecto y consistencia nacional, actúa de manera reactiva y diletante. Las múltiples expresiones sociales y políticas que promueven el retorno de la democracia, no tienen todas la misma convicción ni una referencia que las articule y movilice, que les permita responder a su demanda de institucionalidad en el terreno donde su adversario se despliega.

En la guerra de desgaste, una importante carta de juego de los opositores ha sido denunciar y exponer la verdadera cara del proyecto orteguista, así como exigir la renovación institucional. Ambas acciones son necesarias y válidas, pero no suficientes. Si el proyecto autoritario cuenta con abundantes recursos, a la ciudadanía en general, a los indecisos y a los opositores, les faltan referencias creíbles del liderazgo opositor.

La clase política ha sido incapaz de verse a sí misma e identificar su propio desgaste. Esto incluye al propio gobierno, rodeado de acólitos y arribistas que viven en su propia burbuja autocomplaciente. La clase política vive encerrada en su propio juego de personalismos y retórica, en los que algunos intentan convencerse a sí mismos de ser líderes de algo.

Pero lo que está en juego en las próximas elecciones no son solamente sus resultados, es el futuro de mediano plazo para el país. De ahí que la oposición tiene al menos tres grandes retos históricos: romper la estrategia del control total, cambiar el escenario ya definido por el gobierno para las próximas elecciones y abrir el camino para una nueva alternativa política que renueve al país y refuerce las expectativas de un futuro democrático.